

SEGURIDAD COLECTIVA: NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA PARA AMÉRICA LATINA.

Por el Expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano. Agosto 2009.

Gobernabilidad, globalidad y seguridad en América Latina

Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) registró, con preocupación, que el nivel de satisfacción de los latinoamericanos con sus democracias pasó del 62% al 52% al finalizar el siglo XX. Algunos, ligeramente, asociaron esta opinión con un aparente deseo de los ciudadanos por regresar a las formas autoritarias de gobierno del pasado cuando, en la realidad, lo que este sentimiento colectivo expresa son los altos niveles de insatisfacción de la gente con los gobiernos por su incapacidad para mejorar sus condiciones sociales de vida y abrir más puertas institucionales en sus posibilidades de participación política (Samper, 2007).

Este sentimiento colectivo coincide con una crisis de gobernabilidad explicable en la incapacidad de los modelos de desarrollo adoptados durante los años noventa, para asegurar niveles aceptables de crecimiento y equidad social en la región; aunque el panorama social mejoró en muchos frentes como la cobertura educativa, el alfabetismo o la atención básica de salud, empezando por la nutrición infantil, la aplicación de medidas fiscales de choque desestimularon el empleo, pauperizaron los salarios y añadieron cien millones de nuevos pobres al ya preocupante escenario de desigualdad social que había caracterizado a América Latina durante muchos años. Esta situación se tradujo, a su vez, en una gran insatisfacción social que adoptó formas contestatarias de protesta a través de la proliferación de marchas, huelgas y paros cívicos promovidos por movimientos sociales en lo que se conoció, gráficamente, como “la democracia callejera”. El segundo factor estuvo relacionado con el apareamiento, y en algunos países el recrudecimiento, de unas patologías globales como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción o el armamentismo, cuya dinámica se potenció con la liberación de las barreras y la apertura de nuevos canales propios de la globalización. Estos “tráficos” desafían las posibilidades domésticas de los gobiernos para enfrentarlos. Finalmente, está la incapacidad de los sistemas políticos

latinoamericanos – gobiernos, partidos, congresos – para enfrentar estas dramáticas realidades de fragmentación social, desafío institucional y representación ciudadana. Como resultado la región latinoamericana es hoy más insegura que ayer.

Los países latinoamericanos sortearon con éxito, en la Cumbre de Rio celebrada en 2008 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, una de las más graves crisis políticas en la reciente historia diplomática de la región. La incursión de las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano para dar de baja a Raúl Reyes, el segundo hombre al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), provocó la explicable reacción del gobierno del Presidente Correa del Ecuador y la solidaridad activa de varios países, algunos de los cuales llegaron a romper, por cuenta del incidente, relaciones diplomáticas con Colombia como Venezuela y Nicaragua. Sin entrar a cuestionar las razones que tuvo Colombia para tomar esta decisión o las de Ecuador para rechazarlas, lo cierto es que esta crisis ha vuelto a colocar sobre la mesa las condiciones de precariedad y obsolescencia de la actual política de seguridad hemisférica contra la cual parecen asomarse nuevas amenazas y antiguas amenazas resucitadas. La región no está en calma y su gobernabilidad, por cuenta de estos desafíos, se encuentra cuestionada.

Se sabe, por ejemplo, de la conformación de una Coordinadora Continental Bolivariana, liderada por las FARC, conformada por varios centenares de organizaciones sociales y cívicas de distintos países que se han declarado partidarias del camino de la lucha armada que explicaría la reaparición de focos guerrilleros en algunos países como México y Perú. Se han reactivado también viejos conflictos territoriales entre Chile y Perú, Bolivia y Chile, Venezuela y la Guyana, Colombia y Nicaragua y ésta con casi todo su vecindario. De otra parte, está claro que el involucramiento de las fuerzas militares nacionales en la lucha contra las drogas, como parte de la política de los Estados Unidos, ha contribuido a deslegitimar los ejércitos de la región y desnaturalizar su función de guardianes de la institucionalidad democrática. Para todo el mundo es evidente que la región es hoy más insegura que hace algunos años.

La liberación de barreras que antes guardaban las fronteras, como resultado de la expansión del libre comercio -de cinco tratados de libre comercio que existían al comenzar la década de los 90 se pasó a 250 al comenzar el siglo XXI; los problemas fiscales que se tradujeron en muchos países en una desfinanciación de los cuerpos de seguridad, policía y justicia; los avances del internet y las nuevas tecnologías de comunicación en las posibilidades de comunicación del mundo; la complicidad con el crimen organizado de gobiernos débiles o corruptos; las nuevas alianzas entre bandas criminales y el asentamiento en regiones y ciudades de empresas criminales (Moisés Nahum, ILICITO), han creado un entorno favorable al desarrollo de nuevas formas delincuenciales a las cuales se suman nuevos riesgos y amenazas derivados de la propia globalización.

La diversificación criminal ha encontrado un escenario propicio en las grandes ciudades, afectadas por nuevas formas de delincuencia como el tráfico de personas y de órganos humanos; la formación de pandillas como el Primer Comando Capital de Sao Paulo que en 2008 ocasionó disturbios que terminaron en la ocurrencia de 272 muertes o los 25.000 integrantes de las “maras” en Salvador; la violencia intrafamiliar; el consumo de drogas; el secuestro – cada hora se comete uno en América Latina donde se llevan a cabo la mitad de todos los que se cometen en el mundo; la polución del aire, la contaminación de las aguas, el calentamiento del medio ambiente y su depredación por ciudadanos inconcientes (Secretaría de Gobierno de Bogotá). Esta nueva forma de inseguridad ciudadana, que excede los homicidios y las riñas como delitos tradicionales urbanos, está frecuentemente asociada a fenómenos sociales disruptivos como la fragmentación familiar, el desempleo, la informalidad, el abuso de drogas y la inexistencia de espacios ciudadanos para el fortalecimiento del capital social. El número de homicidios en América Latina - 90.000 al año – es tres veces superior a la media mundial, siendo la violencia la principal causa de muerte entre los 15 y los 44 años (ARI 84,2006). En total, esta última le cuesta a América Latina cerca de US\$ 30.000 millones al año.

Este recrudecimiento de la criminalidad aparece en momentos en que las fuerzas del orden, particularmente la Policía, comienzan a ser severamente cuestionadas en su efectividad y en su transparencia en

algunos países. Uno de cada tres latinoamericanos no confía en su Policía (Latinbarómetro). Se recuerdan episodios como el Caso Blomberg en Argentina o el del General José Gutiérrez Rebolledo, Zar Antidroga de México, destituido por sus conexiones con el Cartel de Tijuana. INTERPOL no funciona adecuadamente, no hay definiciones unificadas sobre los tipos penales a nivel regional que permitirían coordinar las acciones anti criminales transnacionales y los ejércitos hemisféricos, además de aparecer vinculados en tareas que antes eran competencia de la Policía, como la lucha contra las drogas, no son compatibles ni en sus equipos ni en sus protocolos estratégicos (Armando Borrero). Examinemos en detalle algunas de estas amenazas.

LOS DELITOS TRANSNACIONALES

Como resultado de la caída de todas las barreras que antes protegían economías y sistemas políticos, han proliferado los crímenes transnacionales, actividades que se consideran delitos penales en más de dos países (Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional), como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, los delitos informáticos – como estafas con tarjetas de crédito, pornografía infantil, secuestros virtuales - o ataques contra el medio ambiente. Estas nuevas conductas han revaluado los viejos conceptos sobre fronteras y soberanías territoriales para reemplazarlas por límites que pasan por encima de ellas; estas fronteras, asimétricas y desequilibradas, generan precios diferenciales entre las economías de los países y enfrentan sus realidades. Las amenazas contra la seguridad global viajan por fibra óptica y la propia violación de la soberanía se ha convertido en un excelente negocio (Nahim).

El problema del narcotráfico

El narcotráfico es una de las principales amenazas que se cierne sobre la región; ningún país puede declararse indiferente frente a la dramática evidencia de un negocio que mueve más de US\$ 400.000 millones anuales en el mundo. América Latina exporta, según la JIFE, organismo internacional de control de drogas adscrito al sistema de Naciones Unidas, 250 toneladas de coca a Europa por año. Todos los

países latinoamericanos, como productores, distribuidores, de paso, lavadores de activos, vendedores de precursores químicos o, simplemente, consumidores, están amenazados por esta patología global que no respeta fronteras ni leyes nacionales. La conducta criminal, asociada al problema de las drogas, más generalizada en América Latina puede ser el lavado de activos que consiste en el desarrollo de una serie de operaciones, realizadas por personas naturales o jurídicas, tendiente a dar aparente legalidad a bienes de origen ilícito con el fin de ocultar los rastros del delito precedente y disfrutar de la riqueza mal habida (Oviedo, 1997).

Los dineros que se lavan en la región pueden llegar a representar cerca del 2.5% de su PIB y están produciendo efectos devastadores en la solidez del sistema financiero y la calidad y funcionamiento de sus instituciones democráticas como se está demostrando, por ejemplo, en Brasil con la rebelión del narcomenudeo protagonizada en Rio de Janeiro por centenares de bandas, en México donde el gobierno del Presidente Calderón está librando una cruzada heroica contra los carteles de la droga o en Colombia donde la diabólica alianza entre el narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley - guerrilla, paramilitares y narco ejércitos privados - ha producido en los últimos años una peligrosa escalada de un conflicto que de no haber mediado los dineros de la droga como hilo conductor y financiador de las distintas formas de violencia, se habría acabado hace varios años (Secretaría de Gobierno de Bogotá).

A pesar de los esfuerzos por establecer un marco de acción hemisférica contra estos delitos asociados con el narcotráfico, como la creación de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (CICAD) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos de más reciente creación en el año 2000, las evidencias demuestran que las acciones delictivas de los narcotraficantes van mucho más rápido que las declaraciones oficiales sobre su combate y que el problema, antes que resolverse, se multiplica. En Estados Unidos se abre camino la idea, cada día más evidente, de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, la guerra contra las drogas se está perdiendo de forma irremediable, demostrando la aparente inutilidad de una lucha sin cuartel que cuesta US\$ 30.000 millones por año, que ha llevado a encarcelar más de

250.000 personas por delitos asociados con las drogas que representan la cuarta parte de la población carcelaria y de que las autoridades efectúen en promedio 1.7 millones de detenciones por año, está claro, como lo demuestra el comportamiento de los precios de los estupefacientes, generalmente a la baja, el incremento en el número de consumidores permanentes de los mismos (pej 20 millones de jóvenes consumidores habituales de marihuana) y las estadísticas oficiales, según las cuales la producción de los cultivos de marihuana ya estarían excediendo los de otros cultivos tradicionales como el maíz, que la guerra contra las drogas en Estados Unidos no se está ganando. Como consecuencia de estas evidencias se abre camino un interesante debate sobre la “teoría del daño” según la cual, en la guerra contra las drogas, se debe valorar cada medida que se tome en función de si reduce el daño social o lo incrementa y todo parece indicar que en este caso particular la política represiva lo está incrementando (Nadelmann). Lo cierto es que si en algunos años la comunidad internacional no muestra resultados tangibles en la reducción del consumo de las drogas tendrán que buscarse otras alternativas de política como la descriminalización de algunas de las etapas a través de las cuales se producen, distribuyen, financian y consumen las drogas latinoamericanas.

La carrera armamentista

América Latina está regresando a la carrera armamentista que la caracterizó al comienzo de la segunda mitad del siglo pasado; la actitud belicista de entonces fue abandonada y reemplazada por las gestiones de paz adelantadas en algunos países y subregiones, como el Grupo de Contadora en Centroamérica; también influyó en este apaciguamiento el rechazo de las nuevas democracias a las salidas militaristas del pasado que se tradujo en una disminución relativa de los presupuestos militares y el embargo a la venta de armas de alta tecnología decretado por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir a la estabilidad política del hemisferio. Durante estos años de calma, varios países, como Chile y Argentina, mostraron avances significativos en la defensa de los derechos humanos y el “destape” de responsabilidades por las violaciones cometidas por altos mandos militares. Con el final de la guerra fría, el levantamiento del embargo de la venta de armas por parte de los Estados Unidos, el aumento de

la inseguridad ciudadana en las grandes ciudades, el deterioro social de estas democracias y la propagación, ya comentada, de las nuevas patologías globales, el afán armamentista se reactivó alcanzando las armas ligeras. En efecto, en la región existen 500 millones de armas ligeras en poder de ciudadanos de las cuales 300 millones tienen un origen ilegal lo cual ayuda a explicar por qué América Latina presenta el más alto nivel de homicidios con armas de fuego en el mundo y por qué algunos países, como Colombia, sobrepasan el número de vigilantes privados respecto a los efectivos regulares de policía. En Brasil, a pesar del reciente “Estatuto de Desarmamiento”, hay 15 millones de armas ligeras en manos privadas. A este paso, no debería descartarse que algunos países lleguen muy pronto a estar en la situación de los Estados Unidos donde el número de armas privadas ya está alcanzando el de sus habitantes.

Tener un arma en América Latina es considerado un símbolo social de poder especialmente para los jóvenes que han nacido y se han educado dentro de una “cultura de la violencia” en que las armas confieren a los jóvenes el poder que, según ellos, les niega la sociedad. La mayor parte de estas armas de uso personal proviene de los antiguos países socialistas que están realizando a precio de quema sus viejos arsenales aprovechando esta predisposición colectiva de los latinoamericanos a “andar armados”. ¿Qué hacer? Se precisan políticas nuevas y agresivas de desarme ciudadano.

La carrera armamentista también incluye la adquisición de las armas de alta tecnología en las que hoy América Latina está gastando US\$ 34.000 millones al año para reequiparse bélicamente y sostener un pie de fuerza que ya llega a un millón de efectivos, el 50% de los cuales están concentrados en Brasil y Colombia (Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo). Ello explica que el gasto militar en la región haya subido 24% en los últimos dos años. Cada país tiene sus propias razones para justificar la adquisición de estos nuevos armamentos. Colombia para mantener su ofensiva contra la criminalidad organizada, la subversión y el paramilitarismo mediante la compra de equipos de vigilancia fluvial, helicópteros y radares. Venezuela, para resistir una posible invasión por parte de los Estados Unidos, ha incluido en su lista de compras cien mil fusiles AK, ocho buques de guerra, veinticuatro aviones Sukhoi y diez aviones más de

combate F-16. Chile está comprando para enfrentar un eventual conflicto bélico con el Perú por sus fronteras marítimas y hacer “creíble” su propio rol en el Pacífico. Perú lo hace para defenderse de Chile y prevenir el resurgimiento de Sendero Luminoso. Brasil necesita estas adquisiciones para consolidar su condición hegemónica en el hemisferio, asegurar un espacio permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, defender su espacio amazónico y desarrollar una industria militar geoestratégica en el área. Ecuador se arma para cuidar sus fronteras ardientes con Colombia. México lo hace para sostener la guerra contra el narcotráfico que está adquiriendo dimensiones épicas. No debe olvidarse que detrás de los persuasivos vendedores de armas sofisticadas para la guerra están los “vendedores de conflictos” para utilizarlas y que después de ellos vendrán los vendedores de municiones para cargar las mismas armas.

Las opiniones sobre este indiscutible “rearme latinoamericano” están divididas; para algunos, se trata de una decisión lógica en el camino de actualizar el equipamiento militar y ponerlo a tono con las nuevas exigencias de modernización bélica, otros arguyen que lo que está por detrás es el afán por consolidar liderazgos hegemónicos subregionales o ejercer presiones disuasivas sobre potenciales enemigos siguiendo la enseñanza latina de “*si vis pacem, para bellum*”, si quieres la paz prepárate para la guerra. (Coyuntura de Seguridad No 20),

LA CRISIS DEL VIEJO MODELO DEFENSIVO

El esquema de seguridad hemisférica que hoy nos rige se oficializó con el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 que creó la Junta Interamericana de Defensa y, más tarde, con la aprobación en 1947 del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, TIAR, que buscaba organizar la defensa de la región frente a una posible invasión comunista, cuando apenas comenzaba la llamada guerra fría. La estrategia fue reiterada en la creación de la Organización de Estados Americanos, la suscripción del Tratado Amistoso de Soluciones Pacíficas (1948) y estigmatizada con la exclusión de Cuba de la comunidad interamericana. Posteriormente, se buscó de manera poco orgánica responder a la aparición de nuevos desafíos creando comisiones y protocolos para responder a desafíos puntuales. Así

surgió la Comisión para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Comisión Especial de Seguridad Hemisférica (CSH), el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y el Tratado de Tlatelolco contra la proliferación de armas nucleares. La Declaración sobre Seguridad Hemisférica de México (2003) puede considerarse como una gran mea culpa de lo que no se hizo durante muchos años en materia de seguridad para el área. Mientras tanto, las subregiones, movidas por apetitos hegemónicos de algunos países, buscaron la manera de defenderse de nuevas amenazas lejanas del concepto tradicional de Clausewitz de enfrentamientos entre gobiernos, naciones y ejércitos (Borrero), suscribiendo acuerdos como la Declaración Andina de Galápagos que incluyó, entre el catálogo de problemas securitizables, la inseguridad alimentaria y la insostenibilidad ecológica y propuso una zona de paz para el área (Grebe, 2004). Así mismo, la Declaración de Ushuaia (2002) que consagró una zona libre de armas nucleares en la zona de MERCOSUR y, más recientemente, la propuesta de Brasil para crear un Consejo Suramericano de Defensa que pretende crear una especie de “escudo militar” interno en la subregión. México fue el primer país en marcar distancias con el viejo esquema hemisférico al concretar su retiro del TIAR.

Con la caída del Muro de Berlín que dividía simbólicamente el mundo entre comunistas y capitalistas y el recrudecimiento de una serie de patologías globales como el narcotráfico, la corrupción, el armamentismo, el terrorismo y el tráfico de seres y órganos humanos, se modificó totalmente el mapa de riesgos del mundo; América Latina no fue la excepción. Por los canales abiertos de la globalización hoy día no sólo circulan bienes, servicios, flujos financieros y datos; también lo hacen drogas, armas, corruptos, mercancías de contrabando y dólares sucios que llevan a la comisión de verdaderos crímenes transnacionales que producen profundos efectos desestabilizadores en la capacidad institucional de gobernarnos en la medida en que afectan no solamente la integridad territorial sino las sociedades, las personas, las identidades nacionales, los valores democráticos, las instituciones públicas, las economías nacionales y los ordenamientos y códigos de conducta mundiales (Síntesis, 2006).

Una nueva política de seguridad colectiva

La primera tarea que tendrá que hacerse para contrarrestar estas formidables amenazas es la de revisar el viejo concepto de las fronteras originadas en soberanías territoriales que están siendo desbordadas diariamente por estos fenómenos violentos. La supuesta inamovilidad de las viejas fronteras geográficas y políticas ha comenzado a vivir en la práctica un reajuste que obliga a pensar en un nuevo modelo de manejo constitucional y político (Greenfieth, 2008). La nueva política de seguridad hemisférica deberá tener en cuenta que las amenazas que confronta hoy América Latina son originadas en la región o son comunes a todos los países que viven en ella; entender también, sin caer en falsos chauvinismos, que las fronteras han sido reemplazadas por límites y que estos últimos no coinciden necesariamente con aquellas. Lo interno y lo externo tiende a confundirse hoy en una sola problemática realidad que amerita respuestas colectivas y solidarias y el concepto mismo de soberanía trasciende las líneas de los mapas que dividen arbitrariamente los países por ríos, pedazos de selva o montañas.

La nueva política de seguridad hemisférica debe comenzar también por reiterar como suyos los principios que durante muchos años han inspirado la convivencia latinoamericana: el respeto de los derechos humanos, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, el respeto a los tratados internacionales y la solución pacífica de controversias. Este último paradigma debe concretarse en un propósito específico de convertir la región latinoamericana en una Zona de Paz declarada por las Naciones Unidas tal y como se propuso en Brasilia en el año 2001. Pasos importantes en esta dirección se han dado ya como el Tratado de Tlatelolco que declaró la región libre de armas de destrucción masiva y pruebas nucleares. La “zona de paz” sería el referente obligado de la nueva política asumiendo que la paz no es la ausencia de conflictos sino la existencia de maneras consensuales de resolverlos. El concepto de seguridad dentro de la nueva política alcanzaría objetivos más amplios como la seguridad energética, la autosuficiencia alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Incluiría también compromisos concretos por parte de los países para crear una fuerza multinacional regional, una OTAN LATINOAMERICANA, reducir gradualmente los gastos militares,

especialmente en la compra de armamento pesado, desarmar nuestros ciudadanos, reprimir conjuntamente el tráfico de drogas, proscribir el uso de la fuerza para reprimir luchas sociales, honrar los tratados internacionales humanitarios como la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales. responder solidariamente a los estragos causados por desastres naturales y sentar las bases de una cultura de paz en la región que enseñe a tramitar por la vía del diálogo y la convivencia lo que estamos volviendo a resolver por la fuerza de las armas.

El diálogo latinoamericano sobre gobernabilidad democrática de cara al II Centenario de celebración de la independencia .

Estas reflexiones sobre el estado y el futuro de la gobernabilidad democrática en la región son pertinentes y oportunas. La agenda internacional latinoamericana ha estado demasiado concentrada en los temas que interesan a los Estados Unidos como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo o el libre comercio. Europa podría ayudar a enriquecer esta agenda con otros temas que forman parte de preocupaciones más sentidas regionalmente como la supervivencia de sus posibilidades de gobernar en democracia, la adopción de un modelo alternativo de desarrollo orientado hacia la competitividad en lo económico y la inclusión en lo social o la creación no menos importante de una nueva red política de gobernabilidad democrática. Los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la cohesión social, el fortalecimiento de los partidos, la convivencia ciudadana, la globalización de sus ciudades, el equipamiento energético, la creación de nuevas redes de innovación en ciencia y tecnología, como parte de un concepto amplio de gobernabilidad democrática deberían ser tenidos en cuenta en esta Cumbre donde deberíamos hablar en términos políticos de nuestro futuro y de lo que nos une y distancia. Nuestro destino, definitivamente, no puede ser el grito de despecho de Neruda de que para que nada nos divida que nada nos una.

BIBLIOGRAFÍA

- PAUL ISBEL, *Energía y Geopolítica en América Latina*, REA INSTITUTO ELCANO, 2008.
- CARLOS MALAMUD, *Principales Focos de Conflicto Bélico en América Latina*, REAL INSTITUTO ELCANO, 2008.
- GREINFIETH DE J. SIERRA. *De la crisis de los Andes al Reacomodamiento de sus fronteras en América Latina*. Universidad del Rosario, Bogota. 2008.
- COYUNTURA DE SEGURIDAD, No. 19. *Balance Militar y de Seguridad en Sudamérica*. 2007.
- CEPAL, *Globalización y Desarrollo*, 2002.
- CEPAL, *Panorama Social de América Latina*, 2002.
- RODRIK. *The Global Economy*. Harvard University, 1999.
- LINZ JUAN Y VALENZUELA ARTURO. *Presidencialismo Parlamentarismo. Perspectivas Comparativas*. John Hopkins University, 1998.
- SANTORI GIOVANNI. *La sociedad multiétnica*. Taurus, 2001.
- AMARTYA SEN. *On economic Inequality*. Oxford University Press, 1973.
- HORST GREBER. *Mecanismos para la Zona de Paz Andina*. La Paz, 2004.
- OCAMPO JOSE ANTONIO. *Mercado, cohesión social y democracia*. Biarritz. 2005.
- BIARRITZ, *América Latina, la gobernabilidad amenazada*, 2003.
- BIARRITZ, *Parlamentarismo, una salida a la crisis de gobernabilidad de América Latina?*. 2004.
- BIARRITZ, *Como Relanzar las relaciones de América Latina y Europa*. 2004.
- BIARRITZ, *Globalización, Democracia y Territorio*. 2005.
- BIARRITZ, *Movimiento, partidismo y gobernabilidad en América Latina*, 2006.
- BIARRITZ, *Cohesión social, responsabilidad social y gobernabilidad en Europa y América Latina*, 2007.

00000000000000000000000000000000